



Participantes del taller "Desmilitarización, Desmovilización y Reintegración (DDR) de ex combatientes a la vida civil", realizado y organizado por el Instituto de Investigación Social de Hamburgo, Alemania.

Acercamiento al proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en Nicaragua después de 28 años de la firma de los acuerdos de Esquipulas II¹

Soren Chamorro²

Recibido: 28.07.2014/ aprobado: 20.08.2014

RESUMEN

El presente trabajo pretende dar una mirada retrospectiva al proceso de desarme, desmovilización y reinserción de ex combatientes nicaragüenses a la vida civil, después del conflicto armado desarrollado entre los miembros de la Resistencia Nicaragüense y el Ejército Popular Sandinista en los años ochenta. Se hace un repaso general sobre aquellos elementos considerados como fallidos y como causas de los posteriores procesos de rearme, pero también, visualizaremos aquellos elementos que han permitido que en la actualidad Nicaragua siga viviendo en un estado de paz relativa. Asimismo, el artículo abordará alguna información sobre lo que ha ocurrido con las/los ex combatientes nicaragüenses hasta hoy y cuál es la situación del país en torno a la construcción o no de una memoria histórica que garantice la no repetición de un conflicto bélico entre los y las nicaragüenses.

Palabras claves: Desmovilización, Desarme, Reintegración, Pacificación y Memoria histórica.

ABSTRACT

This paper aims to give a retrospective to the process of disarmament, demobilization and reintegration of former Nicaraguans combatants into civilian life, after the armed conflict developed between the members of the Nicaraguan Resistance and the Sandinista Popular Army in the eighties. It will provide an overview on those elements considered as failed and as causes of the subsequent processes of rearmament, but also, visualize those elements that have allowed that Nicaragua still live in a state of relative peace. Also, the article tries to give some information about what has happened to the ex Nicaraguans combatants and which is the situation of the country concerning to the construction or not of a historical memory to ensure the non-repetition of a military conflict among the Nicaraguans.

Key words: Demobilization, Disarmament, Reintegration, Pacification and Historical Memory.

1 Conferencia magistral dictada en el taller "Desmilitarización, Desmovilización y Reintegración (DDR) de ex combatientes a la vida civil", organizado por el Instituto de Investigación Social de Hamburgo, Alemania, del 27 al 30 de abril, 2015.

2 Máster en estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. Responsable de Proyectos y Relaciones Internacionales del Instituto "Martin Luther King" de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

Contexto Nacional e Internacional

La larga guerra civil con componentes de intervención extranjera en Nicaragua fue acompañada desde su inicio por esfuerzos de construcción de paz orientados a poner fin al conflicto armado: Diálogo de Manzanillo Nicaragua-Estados Unidos (1981-1982); Proceso Negociador de Contadora entre los países centroamericanos acompañados de México, Colombia, Venezuela y Panamá (1983-1986); Proceso Negociador de Esquipulas I y II a cuyo acompañamiento se suman Brasil, Argentina, Uruguay y Perú (1986-1987), a esto hay que consignar que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética y Cuba gravitaron a lo largo de todo el conflicto y en su proceso negociador en tanto estuvo ubicado en el marco de la contradicción ideológica Este-Oeste.

Fue la suscripción de los Acuerdos de Esquipulas II (1987) lo que marcó la historia reciente de la paz en Centroamérica, pues entre sus mandatos fundamentales estaban la realización de elecciones libres y democráticas, el respeto de los Derechos Humanos, el desarrollo de procesos de reconciliación y el desarrollo humano sostenible.

En 1990 se realizarían elecciones adelantadas en Nicaragua, marcando un antes y un después en nuestra historia reciente, pues por primera vez una revolución que llegó al poder a través de las armas sería derrotada a través de las urnas. Sin embargo, desde antes de la realización de las elecciones se vinieron desarrollando contactos, diálogos y acciones puntuales de desarme y desmovilización entre el Ejército Popular Sandinista y la Resistencia Nicaragüense, protagonizados fundamentalmente por los comandantes de campo, es decir, jefes de las fuerzas en contienda en el terreno, todo ello estimulado por los Acuerdos de Paz de Esquipulas, pero también por los estragos de la guerra que impactaban dramáticamente al conjunto de la Sociedad Nicaragüense.

En 1988 se desarrollan las negociaciones de Sapoá, entre el Ejército Popular Sandinista y la Resistencia Nicaragüense, mediando como testigos y garantes el Secretario General de la OEA, Embajador João Clemente Baena Soares y el Cardenal Miguel Obando y Bravo. Pero aunque Sapoá significa un paso estratégico hacia el establecimiento de la paz en Nicaragua solo hasta las

elecciones y la instauración del Gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) que llevaba de candidata a doña Violeta Barrios de Chamorro, la Resistencia Nicaragüense tuvo la confianza para entrar de lleno al proceso de desarme, desmovilización y construcción de la paz.

La firma de los acuerdos de paz obedeció a un sin número de factores tanto externos como internos, entre los cuales se pueden destacar:

- La voluntad política de los presidentes Centroamericanos y los otros países de la región de dar por superados los conflictos armados en la subregión;
- El desgaste de la población por la situación de guerra, así como de los mismos bandos enemigos;
- La aguda crisis económica;
- Y la reducción o limitación de las fuentes de financiamiento para la guerra.

Todos estos factores hacían de la guerra un recurso insostenible para ambos bandos y no dejaban otro camino que el fin del conflicto armado (Ministerio de Defensa, 2005).

A nivel internacional se vivía el final de la guerra fría, lo que implicaba el colapso de los modelos políticos y económicos de orden socialista de Europa Oriental, facilitando las condiciones para la instauración de la democracia liberal y el desarrollo de economías de mercado en el mundo. En este sentido el nuevo gobierno electo que recibía una economía en ruinas, con la deuda



Un representante de la sociedad civil y un miembro de las Comisiones de Paz sirviendo como mediador entre los insurgentes y las Fuerzas Armadas Constitucionales.



Grupo de civiles mostrando su voluntad de paz al entregar sus armas a la Brigada Especial de Desarme.

externa per cápita más alta de Latinoamérica por un monto de US\$12,000 millones, equivalente a 6 veces el valor del PIB (Banco mundial, S/F) y una hiperinflación de 1689% (FUNIDES, 2007) tenía que dedicarse a la compleja tarea de la reconstrucción del país, lo que empezaba con el proceso de pacificación y una serie de medidas de ajuste económico.

Darse a la tarea de iniciar un programa de desarme, desmovilización y reinserción implicaba de entrada, crear las condiciones socio-económicas para la reinserción de alrededor de 154 mil ex combatientes a la vida civil, además de otras 500 mil personas afectadas directamente por la guerra, tales como los familiares de los ex combatientes, los refugiados en los países vecinos y los desplazados internos. También es importante recordar que para 1989 Nicaragua tenía una tasa de desempleo del 8.4%, situación que fue agravada en 1990 con los recortes de trabajadores en la estructura gubernamental, reduciendo el número de funcionarios públicos en un 16% (Sequeira, 2001).

Asumido el nuevo gobierno por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, el 25 de abril de 1990, se dio inicio a las labores gubernamentales con un programa de reconstrucción que tenía como base tres pilares fundamentales:

1. La desmovilización de la Contra;
2. La reducción gradual del ejército;
3. Una reforma monetaria.

Dando seguimiento a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Toncontín y el Protocolo de Managua sobre el desarme y teniendo como garantes del proceso de desmovilización al Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA), la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) y a el Cardenal Miguel Obando y Bravo (Representante de la iglesia católica), se da por iniciado el proceso de desarme, desmovilización y reinserción el 25 de abril de 1990. El proceso se inició de manera lenta, debido a la desconfianza de los miembros de la resistencia en las disposiciones tomadas para garantizarles su seguridad y la poca claridad sobre cómo y cuáles serían las medidas para conseguir su reinserción a la sociedad civil.

Para dar inicio al plan de desarme, desmovilización y reinserción se contó con U\$43.3 millones de dólares donados por Estados Unidos, proviniendo U\$30 millones del Congreso, U\$10 millones de USAID y U\$3.3 millones de la fuerza de trabajo para la asistencia humanitaria de USAID. Estos fondos fueron asignados a CIAV - OEA organismo encargado de llevar a cabo el proceso DDR. Asimismo el gobierno de Estados Unidos dio U\$12.5 millones a ACNUR para desarrollar su programa de repatriación tanto en Nicaragua como en El Salvador (Banco mundial, 1993). Según datos del gobierno para 1990 se recibió un total de U\$439.3 millones, en carácter de ayuda de la cooperación internacional (Barrios, 1996). Sin embargo, no existen datos específicos de cuánto de éste dinero fue asignado por el gobierno para el programa de DDR.

En 1993 y más enfocados en apoyar programas de desarrollo de cara a la reinserción de los desmovilizados, se puede encontrar el financiamiento del gobierno de Holanda a Programas ejecutados por el PNUD en la Costa Atlántica Nicaragüense. Asimismo hubo un apoyo

de U\$6 millones de dólares donados por el gobierno de España y que fueron destinados para la reducción del Ejército. Según declaraciones de Sergio Ortega, Presidente de la Asociación de Militares Retirados (AMIR) al diario La Prensa, el Ejército de Nicaragua invirtió alrededor de U\$500 millones en la ejecución de los tres planes de licenciamiento dirigidos a la reducción del Ejército (Bail, 2000), pero no se han encontrado las fuentes a través de las cuales se financió dicho proceso.

También es importante destacar la ayuda que brindó la cooperación italiana para apoyar el proceso de desarme de grupos rearmados, apoyando la gestión de la Brigada Especial de Desarme (BED). Este apoyo consistía en la provisión de microproyectos a los rearmados, para que a cambio de ello entregaran sus armas y se desmovilizaran por segunda vez.

Dificultades

Revisando manuales sobre experiencias de procesos de desarme, desmovilización y reinserción en diversos países, resultan evidentes las múltiples fallas encontradas en el proceso DDR de Nicaragua. Pero esta vez me voy a enfocar en aquellas que generaron una mayor problemática.

Una de las principales dificultades para llevar a cabo el proceso de desarme, desmovilización y reinserción en Nicaragua, fue la poca claridad con la que se establecieron

las medidas para su ejecución. Si bien el acuerdo de Sapoá sobre el cese al fuego fue firmado desde 1988, no fue hasta la firma del Protocolo de Managua cuando se establecieron metas y objetivos claros que generaron una mayor confianza a los miembros de la Resistencia Nicaragüense y que permitieron iniciar su proceso de desarme, desmovilización y reinserción. Desde sus inicios este plan fue visto como un proceso a corto plazo y no como un programa que contemplaba la ejecución de un plan de desarrollo nacional a largo plazo. Según el proyecto de la Matriz de Acuerdos de Paz trabajada por John Paul Lederach, Madhav Joshi y Jason Quinn (2013), de acuerdo con la experiencia de trabajo en 34 conflictos alrededor del mundo, para conseguir cerca de un 80% del cumplimiento de los programas de reintegración de los ex combatientes a la vida socio-económica, se requiere de al menos 9 nueve años de trabajo consecutivo. (P. 6).

El programa de DDR mostró desde el principio poco planeamiento, y eso se pudo observar en los múltiples retrasos sufridos hasta conseguir su iniciación. Ya a mediados de 1990, habiéndose llevado a cabo el proceso de desmovilización, se veía la ineficacia del proceso de desarme, la mayoría de las armas entregadas durante el proceso eran armas viejas e inservibles. Nunca hubo un cotejo entre inventarios de las armas que habían sido recibidas por la Resistencia Nacional y las armas que se estaban entregando, lo que dejó en manos de ex combatientes armas que fueron utilizadas en años posteriores en los procesos de rearme. Según datos de la Brigada Especial de Desarme, durante tres años de operaciones ellos lograron incautar 8,165 armas de guerra y 166,733 artefactos explosivos. No obstante, calculaban que un promedio de 30,000 armas habían quedado aún en manos de civiles, las que han ido saliendo paulatinamente del país por diferentes vías, pero sobre todo por el narcotráfico y el mercado negro (Arévalo Cuadra, 2007).

Debido a la insuficiencia de fondos, no se garantizaron las condiciones básicas para mantener a los ex combatientes en las zonas destinadas para su desmovilización, lo que provocó un movimiento masivo de los desmovilizados a sus comunidades. Por otro lado, tampoco se pudo garantizar plenamente la seguridad de los desmovilizados de la RN. Prueba de ello fue la ola de asesinatos suscitada en contra de los miembros de la RN, que según datos del senado de Estados Unidos confirmaba el asesinato de



Lote de alimento entregado a los rearmados a cambio de fusiles y pertrechos de guerra.

217 excombatientes entre abril de 1990 y octubre de 1992. Es necesario recalcar que el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, no pudo aclarar dichos asesinatos (Silva, 2001).

Finalmente, lo más traumático del proceso fue la reinserción socio-económica de los miembros de ambos bandos, la cual se dio en un contexto extremadamente adverso, pues las políticas económicas del modelo Neoliberal impulsado por el gobierno, estaban en contraposición con las promesas generadas a los ex combatientes para su reinserción (Martí Puig, S/F).

Las promesas de los Polos de Desarrollo, eje principal de los acuerdos para conseguir la desmovilización de los miembros de la Resistencia Nacional, fueron rotas casi inmediatamente después del proceso de desarme y desmovilización, cuando Funcionarios de la Dirección General de la Reforma Agraria declararon la no disponibilidad de los bancos de tierra necesarios para su creación, dando paso a la creación de micro polos de desarrollo en pequeñas extensiones de tierra. Estos micro polos de desarrollo nunca contaron con los elementos básicos para que los ex combatientes pudieran reintegrarse plenamente a la sociedad. Por ende, decepcionados decidieron volver a sus comunidades y buscar una reintegración a la que los desmovilizados nicaragüenses la han denominado como “reintegración por cuenta propia” y es la opción que ellos han encontrado ante la ausencia de apoyo estatal (CEI, 1995). Al carecer de fuentes de capacitación y empleos, estos movimientos solo contribuyeron a agravar la situación de pobreza en el campo, pues como dijo Orlando Nuñez a mediados de 1990 citado por Puig (S/F, P. 90):

“Los campesinos de la Contra no están vacunados contra el desempleo, contra los bajos salarios, contra la desertificación de las tierras, contra la falta de acceso a las tierras, contra las políticas de crédito y las tasas de interés, contra la diferencia entre los precios de la ciudad y del campo... o sea, frente a todos los problemas que padece el campesinado nicaragüense”.

Esta ola de desplazamientos de los desmovilizados al campo y la mezcla de los problemas campesinos con los de los desmovilizados de la RN fueron algunas de las causas que dieron pie a los posteriores procesos



Jóvenes revueltos, ex contras y ex E.P.S. alzados en armas, exigiendo reivindicaciones económicas.

de rearme. Si bien en algunos casos se procedió al otorgamiento de tierras, este no vino acompañado de títulos, créditos y capacitaciones para su administración y desarrollo, lo que hizo que no hubiese capacidad para su eficiente manejo. La principal problemática en torno al tema es que como dice Lederach (1996) en el libro de Ortega (1996):

“La mayoría de las reintegraciones de los desmovilizados son abordadas como “proyectos” orientados a dar soluciones rápidas a los problemas que surgen después de guerras devastadoras. De esta manera se establecen metas a corto plazo y de transición en la que los ex combatientes figuran como objetos y recipientes, incluso llegan a ser considerados obstáculos que deben ser neutralizados para que el resto de la sociedad pueda marchar de conformidad con los esquemas pre- establecidos. Raramente se percibe al ex combatiente como recurso, como promotor o participe capaz de contribuir a la definición e implementación de la paz duradera. (P. vii -viii)

Efectivamente ese fue y ha sido el caso de los ex combatientes nicaragüense, a quienes no se les ha tomado en cuenta para crear éste verdadero plan de reinserción socio-económico, que haya estado y esté acorde con sus necesidades y aspiraciones.

Aunque una mayor parte de los miembros de la Resistencia eran de origen campesino, los hechos no

fueron diferentes con los desmovilizados del Ejército Popular Sandinista y del antiguo Ministerio del Interior, quienes producto de la reducción de los aparatos estatales también tuvieron que engrosar las filas de desempleados y buscar su reintegración socio-económica. Ante tan vasto número de personas a reintegrar surgieron algunas tensiones entre los bandos opuestos y entre los mismos grupos, quienes consideraban poco democráticas y más bien arbitrarias algunas de las reparticiones de las tierras. Otro punto a destacar fue la incertidumbre vivida por ambos bandos en base a las negociaciones y los mecanismos a utilizar para su reintegración. Los procesos fueron cerrados y la información no fluyó hacia las bases, causando incertidumbre y preocupación entre estos grupos, que terminaban desconociendo el papel de sus líderes.

El gobierno, al no contar con un plan integral que promoviera la acción conjunta entre el estado, la cooperación internacional, la comunidad y los ex combatientes, no prestó suficiente atención al proceso de reinserción, dejando que los mismos sujetos desarrollaran sus propios procesos. Muchos de estos grupos al encontrarse siendo marginados, dentro de los marginalizados, encontraron en los procesos de rearme una opción de supervivencia ante la pobreza extrema que experimentaban. Estos grupos habían descubierto que la generación de violencia creaba respuestas más inmediatas del gobierno, por encima de la acción cívica.

Al revisar las noticias y los índices de pobreza en Nicaragua, podemos ver que muy pocos cambios se han

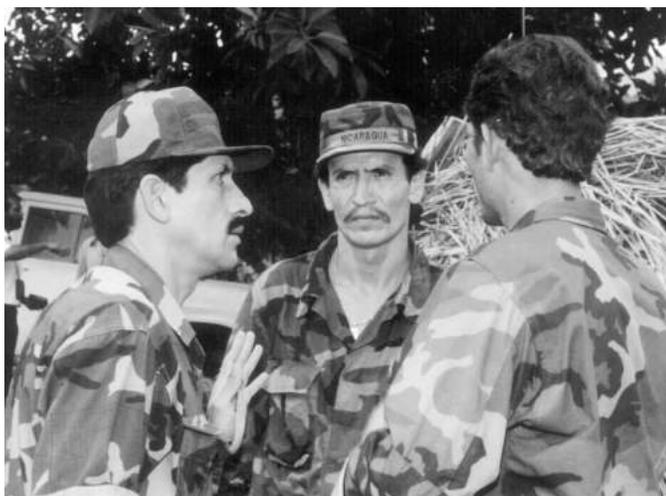
dado desde la realización del Proceso de DDR hasta el día de hoy. Es claro que el Estado no ha asumido las necesidades reales de este colectivo por falta de voluntad política, quienes en vez de hacer frente a su problemática y finalmente concebir ese plan de desarrollo integral, les ha relegado.

Experiencias Positivas

Reconciliación desde las bases

Sin duda alguna, el resultado más positivo del proceso de DDR en Nicaragua ha sido el cese del conflicto armado y la reconciliación que se vivió y aún se vive entre las bases de los grupos contendientes. Como Instituto promotor de la iniciativa de que la Asamblea General de Naciones Unidas declarara el año 2009 como el año internacional de la reconciliación, recogimos aquellos elementos que han fundamentado diversos procesos de reconciliación en el mundo y que tienen como base la verdad, el perdón, la justicia y el resarcimiento de los daños (ONU, 2007). Sin embargo, el proceso Nicaragüense de reconciliación ha mostrado una dinámica diferente que obliga a repensar este concepto. Según John Paul Lederach (1996) el caso nicaragüense “obliga a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la reconciliación”. Según él ha habido una sobre dimensión del papel del pasado, sobre todo desde el campo de los estudios de paz y conflictos, donde para determinar que ha existido reconciliación entre individuos y grupos ha sido necesario seguir una secuencia de etapas. Además según Lederach, es importante remarcar que quienes han escrito sobre estos procesos han sido personas externas al conflicto, tales como mediadores, asesores o autoridades religiosas, pero no los involucrados directamente en los conflictos (Ortega, 1996).

Según Lederach, la experiencia nicaragüense “sugiere que la reconciliación no es un proceso cronológicamente secuencial que demanda plena explicación y reconocimiento previo del pasado como paso previo a la materialización de una nueva relación”. Los testimonios de ex combatientes y sus familias en Nicaragua sugieren más bien un enfoque de reconciliación que parte del reconocimiento de necesidades comunes inmediatas y de las experiencias comunes sufridas, como base de una relación renovada.



Conversación entre el Mayor Guatemala, Musún y Pajarillo (Recontras).

De acuerdo a la experiencia de Nicaragua la verdad ha sido un producto de la reconciliación y no una pre condición para la consecución de la misma. Los ex combatientes nicaragüenses no procuraron borrar el pasado, pero sí asimilarlo, una vez que se habían descubierto como miembros de un colectivo desprotegido.

Entidades con un rol preponderante en el proceso de reinserción social

Retomando el proceso del cese del conflicto armado y sus remanentes durante el período de rearme, resulta también indispensable destacar lo acertado de la creación de la Brigada Especial de Desarme (BED), creada como una alternativa no bélica e integradora que buscaba la consolidación del proceso de desarme y desmovilización ejecutado entre Abril y Julio de 1990. Si bien esta brigada tenía una estructura militar, sus fines estaban enfocados en la consolidación y mantenimiento de la paz. La oportuna mezcla de ex combatientes de los dos bandos antiguamente en conflicto con apoyo de las Comisiones de Paz y los micro proyectos de la cooperación italiana, hicieron posible que gran parte de los grupos rearmados se sentaran a negociar y depusieran las armas (Arévalo, 2007). Resulta válido destacar el componente de educación en Cultura de Paz y su énfasis en la resolución pacífica de conflictos, desarrollada con los miembros de la BED, lo que contribuyó a que se establecieran canales de confianza entre ellos, que permitieran su integración y reconciliación y que una vez en el campo de trabajo se promoviera una salida negociada a los conflictos armados.

Al igual que en otros procesos DDR otro aspecto que cabe destacar como un éxito y que ha servido como base fundamental para apoyar el proceso de reconciliación y de reintegración socio-económica de los ex combatientes nicaragüenses, ha sido la cohesión gremial. Es desde la conformación de gremios entre los ex combatientes que este colectivo de la población se conformó como actor político y democrático. Al descubrirse como grupo empobrecido encontraron en los gremios una manera de luchar para realizar demandas de tipo político, económico y social, pero también para gestionar su propia reinserción, ante la falta de respuestas del Estado. Debe reconocerse también la labor de los mismos ex combatientes al plantear desde el inicio de estas organizaciones la importancia de la promoción de la paz y la reconciliación.



La Brigada Especial de Desarme requisa las armas a civiles e insurgentes para proceder a su destrucción.

En la etapa de reinserción social a las comunidades, es válido destacar el papel preponderante que jugaron las madres de héroes y mártires, quienes en muchos casos fueron las que hicieron un trabajo de base para propiciar la reconciliación y la aceptación de los ex combatientes en sus comunidades. En muchos casos ellas fueron las que prepararon el terreno para la intervención de grupos que promovían la paz, tales como, la Red de Promotores de Paz y Desarrollo, promovida por el Centro de Estudios Internacionales, organismo no gubernamental que jugó un rol importante en la promoción de la paz y la reconciliación entre los ex combatientes (CEI, 2000). Sumamente importante fue también el rol desarrollado por las Comisiones de Paz creadas a raíz de la firma de los acuerdos de Esquipulas II en 1987, bajo la Coordinación de la Comisión Nacional de Reconciliación. Estas comisiones funcionaron en principio en las diversas comunidades de las zonas de guerra, pero posteriormente se extendieron por todo el país y tenían como objetivo principal dar a conocer los acuerdos de paz, llamar al desalzamiento a los contrarrevolucionarios para que se acogieran a la amnistía y garantizar la normal incorporación a la comunidad de los amnistiados. Estas organizaciones fueron la vívida manifestación de la voluntad del pueblo nicaragüense por alcanzar la paz, donde las iglesias de todas las denominaciones tuvieron participación (Envío, 1987).

Para 1994 ante el fin de la misión de la OEA en Nicaragua y procurando no dejar un vacío en las tareas de verificación del cumplimiento de los derechos humanos y la transformación pacífica de los conflictos, este organismo también creó otras Comisiones de Paz. Estas comisiones también contaron con la participación de diversas iglesias, así como con líderes comunales y funcionaron como redes en la zona norte y central de Nicaragua, conocida también como la frontera del conflicto. En ese entonces se llegaron a contabilizar 180 comisiones y subcomisiones de Paz, teniendo como principales objetivos: la mediación, la verificación y promoción de los derechos humanos y la facilitación de proyectos de desarrollo comunitario (Spejar, 2000). Las Comisiones de Paz, permitieron a la población convertirse en actores de sus propios procesos, ante la falta de institucionalidad, logrando no solo fomentar un enlace emocional y social, pero también de desarrollo económico en algunas de las comunidades en las que los excombatientes fueron reinsertados.

La auto reinserción como solución ante la ausencia estatal

El gran fracaso del proceso DDR en Nicaragua, es sin duda la falta de un plan estratégico de Estado para dar respuesta a las necesidades socio-económicas de los ex combatientes y a los otros colectivos también afectados

de forma directa por la guerra. Ante tal problemática son los mismos actores los que han promovido como ellos han decidido llamarle “su proceso de auto reinserción”. Este proceso se ha venido gestando como menciona Raúl Áreas, Director de la Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro (CNOR)³ por medio de las asociaciones gremiales en algunos casos y en otros aprovechando el trabajo de organismos no gubernamentales, que se han venido realizando en algunas comunidades (Entrevista personal, 20 de marzo de 2015). La dinámica ha sido aprovechar los recursos con los que cuentan algunos excombatientes y a partir de eso generar cooperativas y pequeñas microempresas que les generan fuentes de empleo y de ingresos. Otros han corrido con una suerte menor y han migrado hacia Costa Rica o Estados Unidos. Sin embargo no existen estudios que permitan medir el porcentaje de ex combatientes que han migrado en busca de una mejora económica.

Haciendo un análisis general de la situación de los excombatientes, los que están organizados en gremios son lo que han conseguido obtener mayores beneficios. No obstante por la dinámica gubernamental de solucionar más rápido a grupos pequeños se ha fomentado una mayor proliferación de pequeñas asociaciones gremiales, lo que a largo plazo en vez de fortalecer la lucha, les ha debilitado como colectivo.

Retos Pendientes

A 25 años de haber conseguido el cese al fuego en Nicaragua y haber pasado por un proceso de DDR, los índices de la pobreza en el país no han tenido cambios sustanciales. En 1990 el 50% de la población se encontraba bajo las líneas de la pobreza, frente a un 46% en el año 2014. Resulta importante mencionar que la mayor incidencia de la pobreza sigue dándose en el área rural, con un promedio del 68%. De acuerdo a datos del Banco Central de Nicaragua la tasa de desempleo es de 10.5% y el subempleo afecta al 53.7%. Sin embargo muchas ONG's dicen que esta cifra no responde a la realidad actual.



El Mayor Guatemala, Musún y el representante de la Cooperación Italiana una vez llegado al acuerdo de desmovilización.

³ El CNOR actualmente articula a más de 42,000 miembros, todos ex combatientes del antiguo Ejército Popular Sandinista. Este gremio además de velar por los intereses de sus miembros a nivel nacional, ejerce presión a nivel municipal, para que los programas sociales sectoricen a los desmovilizados o veteranos de guerra.



El Teniente Coronel Ramón Ernesto Soza, Jefe de la Brigada Especial de Desarme (BED) y el Sr. Embajador de Italia Ivor Tempis Leug, mostrando armamento requisado por medio de la ayuda de la cooperación Italiana.

Aunque en los años 90's hubo una posición unánime de la población Nicaragüense demandando el fin de la guerra, reflejada esta voluntad en los resultados electorales y por ende de apoyo a los procesos de paz. Encuestas realizadas por el Banco Mundial en el año 1998 sobre los desafíos y oportunidades para la reducción de la pobreza, muestran que un gran porcentaje de la población nicaragüense asocian la década de los 90's con una reducción de su bienestar, clara consecuencia de la aplicación del entonces nuevo Modelo Neoliberal. Datos relativos a la violencia intrafamiliar y civil sugieren que todavía existe un extraordinario estrés social que sigue aún afectando a las familias nicaragüenses (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y Banco Mundial, 2000).

El cambio de un Estado "socialista" a una economía de mercado, parecía abrir oportunidades de crecimiento económico. No obstante en el medio de esa dinámica se dejó a los pobres con una mínima o nula red de protección social.

Cerca del 78% de los excombatientes de la Resistencia Nicaragüense eran de origen rural y es ahí donde fueron

reinsertados (Dallanegra Pedraza, 1994). En el caso del Ejército Popular Sandinista aunque en su mayoría era conformado por personas del área urbana también contaban con un pequeño porcentaje proveniente del campo. Razón por la cual la gran problemática del sector rural volvió a ser compartida por los excombatientes nicaragüenses al reinsertarse en la vida civil.

Desde el periodo gubernamental de la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro, los programas de orden social y productivo fueron dirigidos a la comunidad en general y con muy pocos componentes específicos dirigidos a la reinserción de los excombatientes, dinámica que han seguido los demás presidentes desde entonces.

De acuerdo a los datos obtenidos en las memorias del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro más del 80% de los U\$4,034 millones de dólares recibidos de la cooperación internacional para en el periodo de 1990-1995, fue destinado para el fortalecimiento de acciones que permitieran reducir el déficit fiscal y para el sostenimiento de la estabilidad macroeconómica (Barrios, 1996), solo el 19.2% fue destinado a las importaciones de insumos que utilizaron los diversos sectores de la economía nacional. Debe reconocerse que en este sentido se consiguieron avances significativos, logrando estabilizar la economía nacional. No obstante los avances conseguidos a nivel social fueron deficientes.

Algunas asociaciones gremiales apuntan entre un 8% y 12% de reinserción socioeconómica real de los ex combatientes. Al respecto no existen estadísticas o estudios específicos que permitan corroborar dicha información. Por lo tanto se hace urgente que el Estado finalmente asuma la deuda histórica con este colectivo y se desarrolle un plan de Estado dirigido a compensarlos. La mayoría de los excombatientes ya se acercan a la tercera edad, situación extremadamente dramática para algunos, ya que no contarán con ningún programa de pensión por vejez al no haberse insertado en el mercado laboral formal y por lo tanto no serán beneficiarios del seguro Estatal. Los ex combatientes están al tanto de sus condiciones y por ello muchas de sus demandas actuales están más relacionadas con beneficios para sus familias.

En el marco de esta lucha de los excombatientes por demandar el cumplimiento de los acuerdos pasados, se consiguió en febrero del 2013 la aprobación de la ley

830. Ley Especial para Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional (Asamblea Nacional, 2013). La presente ley tiene por objeto normar y establecer programas y políticas de Estado, orientadas a la atención de necesidades básicas para la reinserción socio-productiva de los excombatientes de guerra. Sin embargo tan pronto fue aprobada, miles de excombatientes comenzaron a reclamar que esta ley no acoge todas sus demandas, entre ellas el reconocimiento de ser nombrados como héroes de la patria (CENIDH, 2013). Otro aspecto que ha causado polémica es el hecho de tener como sujetos de esta ley a más personas, además de los excombatientes y que por su gran número harían casi imposible su aplicación. Los temores mostrados por los excombatientes han sido confirmados, puesto que a más de dos años de la firma de la ley, su reglamentación aún no ha sido realizada.

Las constantes apariciones de los excombatientes en los diversos medios de comunicación realizando diferentes actividades para llamar la atención del Estado, muestran que la problemática de los desmovilizados es aún un tema pendiente en Nicaragua. Nos atreveríamos a decir que la reinserción socio-económica de estos colectivos ha sido limitada o nula en algunos casos. Es de vital importancia también destacar la desigualdad en la distribución de los pocos beneficios otorgados a este colectivo, donde ha primado la afiliación política y el

amiguismo, característica particular de la cultura política nicaragüense.

Resulta difícil hablar de un proceso de paz, cuando el 46% de la población nicaragüense sufre aún los embates de la pobreza, un alto porcentaje de las familias tienen casos de violencia intrafamiliar y la inseguridad ciudadana aumenta año con año.

Se hace urgente que el Estado asuma la deuda histórica con los excombatientes de Nicaragua, mayormente empobrecidos por la falta de acceso a oportunidades, que les ponen en mayor desventaja con respecto al resto de la población nicaragüense. Pero la realidad no muestra que vayan a existir cambios reales en la política que los ha mantenido en esta marginación. Los gobiernos nicaragüenses han tenido la tendencia de ajustar sus planes de gobierno de acuerdo a sus propios intereses, lo que implica un cambio de políticas durante cada periodo gubernamental. En el caso del actual gobierno aunque mantiene un discurso de apoyo y reconocimiento a los ex combatientes del Ejército Popular Sandinista, en la realidad no se pasa del discurso a la acción. La última tendencia está enfocada en tratar de borrar la memoria histórica que recuerda ese proceso de guerra civil vivido en los 80's y la gesta más importante de este periodo, que fue la consecución de la paz. Así nos encontramos al gobierno destruyendo los símbolos de ese proceso, un claro ejemplo de ello fue la destrucción del Faro de la Paz.



Un cabecilla Musún y el Mayor Guatemala durante pláticas para el desarme



Mujeres en posesión ilegal de armas dispuestas a entregar sus fusiles por la pacificación de Nicaragua.



Una comisión de paz durante la firma de un acuerdo de desmovilización e integración a la vida social y productiva.

Acciones encaminadas a borrar la memoria histórica, la evolución de un gobierno autoritario alejado cada vez más de un Estado democrático, la concentración en los problemas urbanos, la invisibilidad de los problemas del campo y la partidización del Estado, son elementos que ponen en peligro ese proceso de calma relativa que ha habido en Nicaragua desde 1990. Desde el año 2010 hasta la actualidad han reaparecido grupos armados que se identifican como excombatientes de la RN, quienes han aducido que su proceso de rearme se debe a la manera antidemocrática en que el Estado está manejando la nación (Fauné, 2014). El gobierno ha tendido a desestimar dichos grupos y a catalogarlos como bandas delincuenciales, pero no hay que olvidar que eso mismo ocurrió después de 1994 cuando el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro dio por terminados los procesos de negociación con grupos rearmados. También resulta curioso que varios de los miembros de estos grupos que se han llamado rearmados han sido asesinados y como antes no ha habido un esclarecimiento de dichas muertes. ¿Será que ante estos hechos podríamos hablar de un proceso de pacificación inconcluso?

Hoy más que nunca es importante que el Estado revise la historia y asuma las consecuencias de la misma. Esto parte por resarcir los daños causados a miles de pobladores nicaragüenses que fueron al frente de batalla para defender intereses comunes, y que hoy están hundidos en la miseria. Por otro lado es también importante analizar cuales fueron esos hechos que nos llevaron a una guerra civil y que tanto de esa historia se está volviendo a repetir en la actualidad. Urge la

gestación de una memoria histórica que nos ayude a no repetir la historia de violencia y barbarie ocurrida en los años 80's y que ha caracterizado a Nicaragua.

Conclusiones

La consecución de la paz en Nicaragua ha sido un proceso largo y doloroso, pero también gratificante, porque ha permitido a los bandos encontrados reconocerse como individuos que comparten intereses mutuos. Este reconocimiento ha sido fundamental para establecer puntos de encuentro y a partir de ahí, conseguir lo que ha sido denominado como reconciliación en las bases.

Uno de los mayores logros del proceso DDR en Nicaragua, es sin duda la reconciliación entre los bandos encontrados, pero también la reconciliación de esos bandos con la sociedad nicaragüense. No obstante, esta reconciliación escapa a las teorías que se tienen sobre ella y obliga a repensar el proceso de la reconciliación como una etapa de pasos secuenciales.

Es indispensable reconocer el papel preponderante desarrollado por la BED, las Comisiones de Paz y la Red de Promotores de Paz y Desarrollo en el proceso de reconciliación y reintegración política y socio-económica de los excombatientes a la sociedad civil. Son estas entidades las que permitieron la articulación de diversas asociaciones, y el reconocimiento de sus miembros como parte de los mismos colectivos que afrontaban las mismas dificultades.



Un miembro de la Brigada Especial de Desarme persuade a un grupo de civiles a entregar sus fusiles.

El Proceso de desarme, desmovilización y reinserción en Nicaragua ha sido un proceso incompleto, en tanto que los excombatientes y gran parte de los colectivos afectados directamente por la guerra, aún después de 25 años no han logrado reinsertarse socio-económicamente en la sociedad, lo cual se ve reflejado en altos índices de pobreza de estos colectivos, las migraciones hacia otros países y en los incrementos en las tasas de violencia e inseguridad ciudadana.

La carencia de un plan estratégico de Estado a largo plazo para el proceso de DDR, ha significado la marginación de los ex miembros de la Resistencia Nicaragüense y del Ejército Popular Sandinista, quienes constantemente realizan demandas solicitando el cumplimiento de los acuerdos firmados en 1990.

La tendencia de los gobiernos nicaragüenses ha sido minimizar las acciones llevadas a cabo por los excombatientes o por el contrario promover soluciones temporales que se han resuelto con la provisión parcial de tierras. No obstante no ha habido una preocupación para formular políticas de largo alcance que solucionen las problemáticas de estos colectivos desde la raíz.

Ante la ausencia estatal para ejecutar estos planes de desarrollo integral, han sido los mismos excombatientes los que han tenido que buscar su propia manera de auto inserción a la sociedad. Este proceso ha tenido como base las asociaciones gremiales, que han tocado las puertas de la cooperación internacional y también han potenciado el rol de los recursos en manos de unos pocos, para crear fuentes de empleo y producción en las que se han insertado los mismos excombatientes.

Resulta preocupante la tendencia del actual gobierno a borrar la historia de nuestro pasado violento y las apariciones de nuevos grupos armados demandando un Estado democrático. Es por ello que urge la recuperación de la memoria histórica que obligue al Estado y a la sociedad nicaragüense en general a analizar las acciones y omisiones cometidas en el pasado, que llevaron a nuestra población a enfrentarse en una guerra civil durante una década.

Finalmente es indispensable asumir la deuda histórica que se tiene con los excombatientes de Nicaragua, a quienes no se les han creado las condiciones socio-económicas



Alacrán, cabecilla recontra entregando las armas de su grupo irregular.

para reinsertarse de manera integral a la sociedad. Pero es aún más importante reconocer el papel de promotores de la paz que ejercieron en sus comunidades en los años posteriores a su desmovilización y que contribuyeron con la consecución de un proceso de reconciliación y de aparente paz.

Referencias Bibliográficas

- Arévalo Cuadra, R. (2007): Alto al fuego. La brigada especial de desarme (BED). Managua. Instituto Martin Luther King.
- Asamblea General de Naciones Unidas (2006). Resolución A/RES/61/17: Año Internacional de la Reconciliación 2009. Nueva York.
- Asamblea Nacional (2013). Ley 830. Ley Especial para Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional. Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 28, del 13 de febrero de 2013. Nicaragua.
- Bail, R. (2000): Reducción a cabo con la maquinaria del EPS. Managua:La prensa.
- Recuperado de <http://www.laprensa.com.ni/2000/06/28/nacionales/734977-reduccion-acab-con-la-maquinaria-del-eps>
- Barrios de Chamorro, V. (1996). Memorias de mi Gobierno 1990-1996. Cooperación Externa. Managua. Dirección de comunicación social de la presidencia.
- Barrios de Chamorro, V. (1996). Memorias de mi Gobierno 1990-1996. Socio-económico. Managua. Dirección de comunicación social de la presidencia.
- BCIE (S/F). Ficha Estadística de Nicaragua. Recuperado

- de <http://www.bcie.org/uploaded/content/article/1249943988.pdf>
- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (2013). Ex Militares recurren por inconstitucionalidad contra ley 830. Managua. Recuperado de <http://www.cenidh.org/noticias/433/>
- Centro de Estudios Internacionales (1995). Hablan los desmovilizados de guerra: Nicaragua, El Salvador y Mozambique. Managua.
- Centro de Estudios Internacionales (2010). 1991-2000: Nueve años aportando a la construcción de la Paz en Nicaragua. Managua.
- Dallanegra Pedraza, L (1994). Relaciones políticas entre Estados Unidos y América Latina: ¿Predominio Monroista o unidad Americana?. Buenos Aires. Recuperado de http://luisdallanegra.bravehost.com/EUA_Amla/capit_29.htm
- Envío Digital (1987). Nicaragua Del ayuno por la paz a las comisiones de paz - II Parte. (78). Recuperado de <http://www.envio.org.ni/articulo/541>
- Fauné, M.A (2014). En la Nicaragua campesina se han ido acumulando engaños, decepciones y enojos. Envío Digital, (386). Recuperado de <http://www.envio.org.ni/articulo/4842>
- FUNIDES (2007): EVOLUCIÓN ECONÓMICA NICARAGÜENSE. Midiendo la economía Nicaragüense a través de los cambios de Gobierno. ¿En qué condiciones recibe cada Presidente el país. Managua. Recuperado de http://www.funides.com/documentos/FUNIDES_Evolucion_Desarrollo_Terminos_Presidenciales_FINAL.pdf
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y Banco Mundial (2000). Nicaragua: reporte de pobreza desafíos y oportunidades para la reducción de la pobreza. Managua. Volumen I: Reporte Principal. Recuperado de <http://www.inide.gob.ni/bibliovirtual/publicacion/reportepobreza.pdf>
- Lederach, J. P., Joshi M. & Quinn, J. (S/F). Research and practice on peace processes 34 peace accords around the world.
- Ministerio de Defensa y Ejército de Nicaragua (2005). Nicaragua: Libro de la Defensa Nacional. Managua.
- Martí Puig, S. (S/F): Nuevos temas de seguridad en América Latina. El proceso de desmovilización y “reinserción” de la contra nicaragüense: algunas claves para el análisis de la violencia rural en Nicaragua. Barcelona. Fundación CIDOB.
- Ortega, Z. (1996): Desmovilizados de guerra en la construcción de la Paz en Nicaragua, Managua. Centro de Estudios Internacionales.
- Sequeira, L. E. (2001): Empleados públicos víctimas de los ajustes, Managua: El observador económico. Recuperado de http://www.elobservadoreconomico.com/archivo_anterior/110/empleados.htm
- Silva, J. A. (2001). Segunda autopsia a Comandante 3-80 bota investigaciones nicas. Managua: La Prensa. Recuperado de <http://www.laprensa.com.ni/2001/02/15/nacionales/798201-segunda-autopsia-a-comandante-3-80-bota-investigaciones-nicas>
- Spehar, E. (2000). Las Comisiones de Paz en Nicaragua. En Sapoznikow, J., Salazar, J. & Carrillo-Flórez (Ed), Convivencia y seguridad: Un reto a la gobernabilidad. (PP. 167-176). Alcalá de Henares: BID.